

Sociedad civil, movilización colectiva y cambios políticos en el Norte de África

Laurence Thieux

Investigadora sobre mundo árabe y musulmán



Desde el principio de la década de los noventa, la falta de democracia en los países del Norte de África ha estado en el origen de muchos debates teóricos, articulados en torno a la tesis a veces divergentes sobre los factores que favorecen o obstaculizan la emergencia de sistemas democráticos en la región pero, coincidiendo la mayoría, en identificar la sociedad civil como un elemento clave de dichos procesos.

La existencia de una sociedad civil fuerte y dinámica capaz de contrarrestar la voluntad hegemónica del gobierno se consideraba como un paso ineludible y clave en los procesos de democratización (Yom, 2005). De acuerdo con esta premisa asumida por la mayoría de los círculos políticos y académicos, el apoyo a la sociedad civil se convirtió en el *leitmotiv* de los discursos de los países occidentales sobre la democratización del Norte de África y Oriente Medio.

Los fracasos de los procesos de reforma política en los países del Norte de África como de Oriente Medio han puesto de manifiesto los límites de la acción de la sociedad civil

Los fracasos de los procesos de reforma política en los países del Norte de África como de Oriente Medio han puesto de manifiesto los límites de la acción de la sociedad civil y de su impacto en los procesos de cambios políticos. Lo que ha conducido algunos autores a contestar la teoría según la cual la presencia de una sociedad civil dinámica y estructurado puede ser un potente vector de democratización y demostrando, por el contrario, que su instrumentalización por los mismos regímenes en plaza ha podido contribuir a mantener la estabilidad de los regímenes autoritarios, hábiles en utilizar nueva fuente de legitimidad y estabilidad en su provecho (Pratt, 2007; Liverany, 2008).

Frente al estancamiento y falta de avances en materia de democracia, los principales socios de los países de la región, Europa, sus Estados Miembros y Estados Unidos han obviado durante años los pésimos índices de gobernanza democrática de estos países a cambio de su preciada colaboración en preservar sus intereses económicos y de seguridad (lucha contra la inmigración y flujos migratorios). El apoyo a la sociedad civil se convirtió en una política por defecto, pero sin ser acompañada por las debidas presiones para que las promesas de apertura y democracia se concretaran realmente en medidas tangibles y efectivas.

Los levantamientos populares que a finales de 2010 y principio de 2011 sacudieron la estabilidad política de la mayoría de los países de la región y los cambios políticos que han provocado en algunos, han vuelto a dar mucho protagonismo a los actores de la sociedad civil.

El objetivo del presente artículo es aportar elementos de reflexión sobre la contribución de la sociedad civil a los procesos de cambio político a partir del análisis de diferentes casos de estudios. El concepto de sociedad civil es muy amplio y va “revistiendo” un abanico muy diverso de entidades, actores, organizaciones, movimientos de diferente naturaleza, objetivos y estrategias. El análisis se centrará, por lo tanto, en aquellos actores que desempeñaron un papel en los procesos de movilización colectiva que han provocado cambios políticos en la región a partir de 2011.

Algunos autores como Amy Hawthorne han identificado los atributos fundamentales que tienen que reunir las organizaciones de la sociedad civil para cumplir una función “democratizadora”: ser autónomas respecto al régimen político; tener una agenda enfocada hacia la promoción de la democracia y tener la capacidad de construir coaliciones (Hawthorne, 2004).

Otros elementos son necesarios para que la sociedad civil pueda ser el motor de procesos de movilización colectiva como los que impul-

saron los cambios de regímenes en algunos países del Norte de África en el año 2011. Como lo señaló Oberschall (1973), una de las condiciones para que haya una acción colectiva es que haya vínculos entre los que contestan el sistema político establecido y que por otro lado los canales de comunicación con el Estado y los gobernantes se hayan roto o sean inexistentes. La base organizativa es al mismo tiempo necesaria para que la protesta se mantenga en el tiempo. Esta cohesión horizontal entre diferentes sectores de la sociedad civil sólo puede darse si se consigue superar las fracturas que han dividido a la sociedad civil en esta región (clases sociales, ámbito rural-urbano, movimientos religiosos-seculares).

La sociedad civil presenta en cada país características singulares y está condicionada por el tipo de relaciones establecidas con el régimen en plaza. El balance de los tres años que han seguido el derrocamiento de los dictadores en Libia, Túnez y Egipto pone de manifiesto esta diversidad de escenarios: el retorno del ejército a la cabeza del Estado en Egipto; los avances logrados en Túnez en el proceso de transición con la adopción de la nueva Constitución en enero de 2014; y la caótica situación política de Libia.

La sociedad civil “en entornos hostiles”: ¿agente de cambio o de *statu quo*?

Sin la existencia de un entorno favorable es muy difícil que las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar una función “democratizadora”. La sociedad civil es una precondition a la emergencia de la democracia, pero su desarrollo y “real funcionalidad democrática” solo puede realizarse en entornos políticos democráticos. Como lo señaló Jean Leca: “Estructuralmente y culturalmente la democracia requiere cierto tipo de pluralismo y de la sociedad civil cuyo contenido y validez son acaloradamente disputados y cuyas perspectivas de desarrollo dependen del mismo éxito del proceso de democratización” (Leca, 1993: 35-93).

En contextos políticos autoritarios, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) deben hacer frente a numerosos obstáculos y dificultades que les impiden en muchos casos ser independientes del Estado y ser portadoras de un proyecto colectivo autónomo. Las organizaciones que contestan el orden establecido son perseguidas por las autoridades y se ven obligadas en la mayoría de los casos a trabajar en la clandestinidad y en condiciones muy difíciles. Ha sido el caso de la sociedad civil tunecina bajo el régimen de Ben Ali, o de la sociedad civil egipcia en los diferentes momentos pre y post “revolucionarios”, es también el caso de la sociedad civil argelina y el de parte de la sociedad civil marroquí.

Represión y marcos legales represivos

En la mayoría de los países del Norte de África y a excepción de Túnez, los marcos legales vigentes que regulan la vida asociativa siguen siendo muy restrictivos y no garantizan la libertad de asociación, expresión, reunión y manifestación ni las libertades sindicales. Además las organizaciones de la sociedad civil están sometidas a prácticas administrativas arbitrarias que impiden o limitan su capacidad de actuación.

En Egipto después de la “revolución del 25 de enero” no se han producido cambios significativos respecto al marco legal que regula la vida asociativa. Durante la primera etapa dirigida por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, a pesar de las diferentes propuestas presentadas por la sociedad civil no se ha modificado la Ley que regula la actividad de las asociaciones. Tras la llegada a la presidencia del islamista Mohamed Morsi tampoco mejoró la situación. En un informe, el Cairo Institute for Human Rights (CIHRS), manifestaba su inquietud tras analizar los primeros 100 días de la presidencia de Morsi, indicando la falta de progresos significativos en la protección de los derechos humanos en Egipto. Tras el golpe de Estado del 3 de julio de 2013, el nuevo gobierno en Egipto no está dando señales más positivas: en octubre de 2013 el Ministerio de Justicia ha aprobado un borrador de ley que impone numerosas restricciones a la libertad de reunión y manifestación así como al derecho a huelga. El nuevo proyecto de ley amplía las prerrogativas del Ministerio de Solidaridad Social sobre los asuntos internos de las asociaciones, pudiendo interferir en la composición de su comité de dirección, suspender sus actividades y controlar sus finanzas.¹

Las organizaciones de la sociedad civil están sometidas a prácticas administrativas arbitrarias que impiden o limitan su capacidad de actuación

En Argelia, la ley aprobada por la Asamblea Nacional Popular el 13 de diciembre de 2011, introdujo disposiciones represivas tanto para la creación de nuevas asociaciones como para las ya existentes al someter a las asociaciones a un régimen de autorización previa que reemplaza al régimen de declaración. La nueva ley refuerza también los mecanismos de control sobre la financiación externa de las asociaciones². Además las visitas de las organizaciones internacionales de derechos humanos magrebíes o internacionales han sido sistemáticamente bloqueadas dificultando la entrega de visados a los militantes que integran estas misiones.

En Marruecos, la ley de asociaciones en vigor reformada en 2002, establece un régimen declarativo que en la práctica se convierte también en un régimen de autorización previa. En numerosas ocasiones la administración se ha negado a entregar el recibo de recepción del

¹ Ver al respecto el comunicado de la REMDH del 23/7/2014 en:

<http://www.euromedrights.org/fra/2014/07/23/egypte-de-nouvelles-mesures-visant-a-entraver-davantage-le-travail-des-ong/>

² Ver <http://www.euromedrights.org/>

expediente que entregan las asociaciones para su registro y reconocimiento legal. Este resguardo provisional es fundamental para las asociaciones, en la medida en que acredita la presentación del expediente frente a la administración y las decisiones que esta adopte. La falta de reconocimiento legal tiene muchas consecuencias negativas para la capacidad de acción de las organizaciones (como la falta de acceso a subvenciones y al alquiler de un espacio de trabajo, o la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria) y les priva del derecho de reunirse en lugares públicos o convocar manifestaciones. Muchas organizaciones siguen teniendo dificultades para registrarse, particularmente las que están vinculadas al movimiento de Justicia y Espiritualidad, o las relacionadas con la defensa de los derechos humanos en el Sahara, o las que tienen reivindicaciones independentistas. En 2014, la Asociación Freedom Now, que forma parte del comité de apoyo a Ali Anouzla³, fue rechazada al no lograr la entrega del resguardo de notificación de presentación del dossier.

En Túnez, antes de la caída de Ben Alí, las asociaciones que trabajaban por los derechos humanos y los derechos de las mujeres, como la Ligue Tunisienne des Droits Humains (LTDH), l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) o el Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) eran escasas y hacía su labor en condiciones muy precarias, por el acoso al cual estaban sometidas por las autoridades como detenciones, vigilancia continua, bloqueo de sus fondos, etc. Perseguidas y sometidas a severos controles, difícilmente podían seguir trabajando y la influencia que podían tener en la sociedad tunecina era muy limitada.

La represión no es la única estrategia utilizada para neutralizar las organizaciones de la sociedad civil que mantienen un discurso crítico frente al poder. Los regímenes autoritarios que siguen dominando los escenarios políticos del Norte de África (a excepción de Túnez) han tratado de compensar esta política represiva otorgando un mayor espacio de libertad a las asociaciones caritativas y sociales que no contestan el orden político establecido.

Instrumentalización

Una de las prácticas habituales de los gobiernos de la región ha sido la instrumentalización de la sociedad civil y la creación de numerosas asociaciones paraestatales que cumplen a la vez una doble función: permiten dar cierta legitimidad al sistema al mostrar una imagen de pluralidad de cara al exterior; al mismo tiempo su labor de prestacio-

³ Este Comité de apoyo ha sido creado en solidaridad con el periodista y director de Lakome Ali Anouzla, detenido en septiembre de 2013 tras la publicación de un video atribuido al grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico.

Minoritarias y acosadas por el poder, las organizaciones de la sociedad civil que pretenden ejercer una función de contrapoder, no constituyen una amenaza mayor para el sistema

nes de servicios sociales contribuye a paliar los déficits del Estado en ámbitos como la educación, la salud, el desarrollo. El desarrollo de este tejido asociativo volcado en la acción socio-caritativa, ha ido acompañado por la paralela supresión o cooptación de los partidos de oposición política, sindicato y movimientos sociales. Por lo tanto, el elevado número de asociaciones en estos países no es un indicador fiable de avances en el camino de la democracia. En el 2008, Argelia contaba con 81.000 asociaciones censadas pero la gran mayoría eran totalmente dependientes del Estado y tenían un carácter socio-caritativo y no presentaban ningún reto para el sistema político (Thieux, 2009).

Divisiones, infiltración y clonación

El régimen argelino ha sido particularmente hábil en mantener una fachada democrática con una sociedad civil “domesticada y configurada a medida”, utilizando unas tácticas muy elaboradas como la clonación de organizaciones (los sindicatos autónomos) que consiste en crear organizaciones similares bajo su tutela para sembrar la confusión entre las personas afiliadas, creando disidencias, manipulando a los militantes más oportunistas o más frágiles con el fin último de debilitar estas organizaciones.

Minoritarias y acosadas por el poder, las organizaciones de la sociedad civil que pretenden ejercer una función de contrapoder, no constituyen una amenaza mayor para el sistema. Estas organizaciones están divididas y no han podido canalizar el descontento, que se manifiesta en el país bajo la forma de revueltas y protestas localizadas. Al contar con importantes recursos procedentes del sector energético, el régimen ha podido al mismo tiempo “comprar la paz social”, tratado de satisfacer las reivindicaciones económicas y las demandas sociales de los argelinos a través de la redistribución de la renta mediante el incremento de salarios de los funcionarios del sector público y el aumento de los subsidios. El PNB por habitante aumentó de 1.600 \$ al año en 1999 a 4.593\$ en 2010 y desde el 2003, el 50% de total de la renta generada ha sido destinado a políticas sociales (Aenius, Martínez y Holm, 2014). Esta estrategia ha sido parcialmente exitosa: aunque el número de protestas ha disminuido, el fenómeno no ha sido erradicado y es en el Sur del país donde han sido más frecuentes: en Ouargla y otras ciudades del sur de Argelia se han contabilizado cerca de 5.000 manifestaciones y disturbios en el primer semestre de 2013⁴. El Comité National pour La Défense des Droits des Chômeurs (CNDDC), un movimiento que ha conseguido canalizar las frustraciones de muchos jóvenes desem-

⁴ Ver al respecto : http://www.liberation.fr/monde/2014/07/29/des-affrontements-dans-le-sud-de-l-algerie-font-une-trentaine-de-blesses_1072354

pleados en el Sur ha tenido un creciente protagonismo y ha conseguido visibilizar el profundo malestar de la población en el Sur. En la región del M'zab las tensiones sectarias han desembocado en violentos enfrentamientos entre la minoría ibadí (también conocida como mozabitos en esta región) y la mayoría compuesta de comunidades musulmanas suníes. En cualquier caso estas manifestaciones puntuales de descontento no han desembocado en un movimiento de protesta más general y articulado, con reivindicaciones políticas capaz de movilizar a la población más allá del ámbito local⁵.

El trauma causado por la cruenta guerra civil de los noventa que acabó con la vida de unas 200.000 personas explica porque en Argelia la barrera del miedo es más difícil de franquear. El régimen utiliza además, la actual situación regional para reforzar este anhelo por la estabilidad y el miedo al caos. Durante la última campaña electoral para la reelección sin sorpresa de Abdelaziz Buteflika, la televisión pública ha puesto especial énfasis en transmitir imágenes de la violencia que reina en Siria, Libia y Egipto. La década negra ha provocado también una profunda desintegración social y la sociedad civil ha quedado diezmada, fragmentada y muy debilitada.

La fragmentación de la sociedad civil y la falta de credibilidad de los partidos políticos dificultan la emergencia de estructuras organizativas capaces de orientar y dirigir un movimiento de contestación política amplio. Al calor de la primavera árabe algunas organizaciones lo intentaron a través de la plataforma Coordinación Nacional para el cambio y la democracia, agrupando a distintos partidos y sindicatos. La manifestación convocada en Argel en febrero de 2010 sólo consiguió congregarse a unas 3.000 personas frente a un despliegue de 30.000 policías. La plataforma se escindió a las pocas semanas de su creación por las fuertes divergencias ideológicas existentes en su seno. Agrupaba a varias de las viejas figuras del sistema desde Sid Ahmed Ghazali (que era primer ministro durante la presidencia de Chadli Benyedid en 1991), a Said Saadi de la Reagrupación para la Cultura y la Democracia RCD, un partido que apoyó el golpe de los generales que acabó con la experiencia de democratización de los años noventa; la Liga Argelina de los Derechos Humanos (LADDH) junto con varios sindicatos autónomos. O la más reciente Coordinación Nacional para las Libertades y la Transición democrática, agrupando a figuras destacadas de la oposición y partidos políticos como el RCD o el islamista moderado MSP (Werenfels, 2014).

Al mismo tiempo, las autoridades proceden generalmente a la represión de estas manifestaciones mediante un uso desproporcionado de la fuerza. Las manifestaciones del movimiento Barakat (Ya basta)

⁵ En 2010 fueron registradas 11.500 revueltas en todo el país.

que surgió para protestar contra el cuarto mandato de Buteflika han sido sistemáticamente reprimidas. Intentaron organizar un sentada delante del Facultad Central de Argel, la víspera de la celebración de las elecciones el 17 de abril de 2014, pero sin éxito por la presencia masiva de las Fuerzas de Seguridad que impidieron a los manifestantes acceder al lugar previsto.

En general la violencia que caracteriza los modos de gestionar los conflictos por parte de las autoridades han debilitado profundamente los vínculos sociales. El marco jurídico y las prácticas administrativas represivas limitan mucho la capacidad de las OSC y las asociaciones vinculadas a la incidencia política, defensa de los derechos humanos u otras cuestiones (justicia transicional respecto a la década negra) son sistemáticamente vigiladas e infiltradas por los servicios de inteligencia. A pesar de este entorno hostil al desarrollo de una sociedad civil autónoma y unida capaz de presentar un frente de oposición al sistema, nuevas formas de movilización están surgiendo a través de estructuras más informales, Algérie plurielle, Citoyen Algérien libéré, J'accuse, que surgieron durante la intensificación de las protestas en el 2011 o como el movimiento "Barakat".

La violencia que caracteriza los modos de gestionar los conflictos por parte de las autoridades han debilitado profundamente los vínculos sociales

Sociedad civil y promoción de los derechos humanos y la democracia: el caso de Egipto antes de la revolución del 25 de enero

Aunque el número de asociaciones tanto en Marruecos, Argelia o Egipto sea muy elevado, el número de organizaciones que trabajan directamente en el ámbito de los derechos humanos y la democratización o que asumen tareas de incidencia política en sus diversos sectores de intervención es mucho más reducido. En Túnez, en el año 2010 sólo el (1%) de las 9.969 asociaciones existentes intervenían en el ámbito de los derechos humanos (Ketiti, 2013). En el caso de Argelia de las 93.654 organizaciones de la sociedad civil censadas, sólo 1.027 operan a nivel nacional y tan sólo 23 son organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y siete los derechos humanos (Cerroloza, 2013).

En el caso de Egipto, la sociedad civil se compone principalmente de asociaciones y ONG de prestación de servicios, siendo las ONG de movilización social y política muy minoritarias. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, dirigidas por una élite intelectual y política, son minoritarias. Para sortear las trabas administrativas y obstáculos del marco legal en vigor impuesto por el Ministerio de Asuntos Sociales⁶ la mayoría de las organizaciones de derechos

⁶ El ministerio ha sido renombrado durante la presidencia de Sissi para llamarse Ministerio de Solidaridad social y de la justicia. Se ocupa de la autorización y registro de las asociaciones así como del control de sus actividades y finanzas.

humanos no están registradas como asociaciones sino como compañías privadas y sus militantes han sido perseguidos. Ha sido el caso, entre muchos otros, de Hisham Mubarak de la Egyptian Organization for Human Rights, que fue detenido a finales de los ochenta junto con otras personalidades e intelectuales: Saad Eddin Ibrahim ou Kamal Abbas du Center for trade unions and worker services).

A pesar de un entorno político y legal represivo, se produjo una mutación del espacio público en la medida en que junto con la presencia de organizaciones dependientes y controladas por el Estado, surgieron colectivos civiles que han ido ensanchando espacios de autonomía respecto a los poderes públicos. A partir del año 2000, el papel de estos diferentes colectivos volcados en las movilizaciones sociales y políticas empezó a fortalecerse. El campo asociativo empezó a expandirse geográficamente y con una mayor diversidad temática (Ben Néfissa, 2011). Aparecieron nuevos espacios de reivindicaciones permitidos en la medida en que no cuestionaban directamente la legitimidad del poder establecido. Uno de ellos se creó en torno a la solidaridad con la causa Palestina que ha sido siempre un motor de movilización popular importante en el mundo árabe. En otoño de 2000, veinte ONG e intelectuales de la izquierda organizaron el Comité Popular de Solidaridad con la Intifada Palestina, que empezó a organizar manifestaciones públicas con cada vez más frecuencia. Las primeras demostraciones públicas del movimiento Kifaya datan del 2004, ya manifestando su oposición a la intención de Mubarak de presentarse a un quinto mandato presidencial y los preparativos para la sucesión de su hijo Gamal (Beinin, 2009: 181-217). Este colectivo formado por un pequeño grupo de activista centrado en la reivindicación democrática ha sido muy importante al mostrar como utilizando los medios de comunicación y ayuda externa podía pese a su reducida dimensión tener un impacto relevante.

El movimiento obrero desempeñó también un papel clave en la etapa anterior al “25 de enero” con el incremento del número de protestas a partir de 2004 coincidiendo con la aceleración del proceso de privatización acometido por el gobierno de Ahmed Nazif. Los estragos sociales de estas políticas con la degradación de las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población desembocaron en crecientes movilizaciones sociales y huelgas de los trabajadores en diferentes sectores como en el del textil (huelga de Ghazal al Mahalla). Al margen del sindicato oficial aparecieron nuevas organizaciones de sociedad civil apoyando la emergencia de fuerzas sindicales independientes a través de la formación y el apoyo logístico. Aparecieron organizaciones de apoyo a los trabajadores como el Hisham Mubarak Law Center, New Women Foundation, Coordinating Committee for the Union and workers rights and liberties. De allí surgieron las primeras iniciativas de creación de sindicatos

independientes (Independent General Union of Real State tax authority workers) reconocido por el gobierno en abril de 2009.

La huelga de Ghazl al-Mahalla desencadenada en abril de 2008 marcó un hito en la medida en que lo que en un principio empezó como una reivindicación económica y social acabó teniendo un marcado carácter político. La movilización logró extenderse con el apoyo de diferentes partidos de la oposición y colectivos como Kifaya. De esta experiencia nació el movimiento del 6 de abril que tuvo luego un papel destacado en las protestas de enero de 2011 (Barreñada, 2011). Otro de los movimientos que fueron creados en la red fue el “We are all Khaled Said” administrado por Wael Ghonim para protestar contra la muerte del joven Khaled Said que murió en una comisaría tras los golpes recibidos en junio de 2010 en Alejandría.

Las experiencias de contestación previas a las “revoluciones” han sido fundamentales en la medida en que han ido formando una nueva generación de militantes y han creado vínculos entre diferentes sectores de la sociedad fundamentales para desenclavar las protestas y darles una dimensión nacional. La lucha por los derechos económicos y sociales ocupó un lugar central en las protestas antes del 2011 y también en las “revoluciones” con lemas como “dignidad y justicia social” contestaban la legitimidad del poder establecido y el contrato social tácito establecido entre los pueblos y sus gobernantes tras el logro de las independencias. La sociedad civil ha cuestionado los términos de este contrato sustituyéndolo por un discurso nuevo con un enfoque de derechos y libertades. El lema que se oyó en todas las manifestaciones de la “primavera árabe”: “El shaab yurid... el pueblo quiere” es un indicador de esta transformación profunda en la cual el pueblo pasa de objeto a sujeto activo.

La unidad de los diferentes sectores de la sociedad civil en torno a la meta común de hacer caer el sistema se rompió en las fases posteriores de transición o reformas, dando paso al retorno a las divisiones y la falta de cohesión social que han dominado las primeras etapas de los procesos de transición en Egipto como en Túnez. La brecha ideológica entre el proyecto de sociedad secular y el proyecto islamista ha polarizado los escenarios políticos de estos dos países.

En vísperas del estallido de la revolución del 25 de enero en Egipto, la sociedad civil ofrecía por lo tanto un panorama contrastado entre por un lado: unas ONG muy dependientes del Estado, organizaciones de derechos humanos con un margen de maniobra muy estrecho y la emergencia de nuevos movimientos sociales que han ido consolidando espacios de autonomía y oposición respecto al poder.

La caída de Mubarak no condujo a la mejora del entorno político y legal para las asociaciones, por el contrario las medidas represivas

La brecha ideológica entre el proyecto de sociedad secular y el proyecto islamista ha polarizado los escenarios políticos de Egipto y Túnez

se endurecieron. El Consejo superior de las Fuerzas Armadas que dirigió el país tras la salida del Presidente adoptó una nueva ley que tipificaba como delito las manifestaciones y demás formas de protesta pacífica. Casi doce mil civiles han sido detenidos y llevados ante tribunales militares desde el inicio de la “revolución del 25 de enero”. Se adoptaron medidas para estrechar el control jurídico de la financiación extranjera de las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones políticas. Las oficinas de organizaciones con financiación extranjera fueron registradas y fueron posteriormente investigadas y prohibidas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el 29 de diciembre de 2011 y perseguidos judicialmente sus responsables.

Las organizaciones de la sociedad civil egipcia han sido desde el principio del 2012 objeto de una campaña de difamación, acusándolas de ser espías al servicio de intereses extranjeros. Se han perseguido judicialmente a algunas ONG egipcias y fundaciones extranjeras. La ley vigente 84/2002, obliga a las ONG a registrarse en el Ministerio de Solidaridad y Justicia Social (antes denominado Ministerio de Asuntos Sociales) y a solicitar autorización para recibir y utilizar financiación extranjera. Asimismo, otorga al Ministerio de Solidaridad y Justicia Social la potestad de no permitir el registro a determinadas organizaciones.

Para poder tener un impacto sobre los procesos políticos, las OSC tienen que disponer, por un lado, de un entorno favorable y por otro lado ser capaces de coordinarse, articular sus estrategias para poder incidir sobre las agendas gubernamentales y así mismo tener la capacidad de conectar con las bases, ser representativas y poder dar voz a las preocupaciones de los ciudadanos y sus principales reivindicaciones.

El análisis de las protestas de finales de 2010 y principios de 2011 en Túnez, así como las experiencias previas de movilización social es clave para identificar los factores que confluieron para que el movimiento de protesta se extendiera a diferentes sectores de la población y trascendiera su dimensión local.

El papel de la sociedad civil en las fases previas a las “revoluciones”

En el proceso de movilización popular, desencadenado por la inmolación del joven Bouazizi (International Crisis Group, 2011) intervinieron muchos actores de la sociedad civil: magistrados, organizaciones de derechos humanos y activistas jóvenes junto con colectivos de diplomados desempleados a las que se sumaron las ramas locales de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT).

La unidad de los diferentes sectores de la sociedad civil en torno a la meta común de hacer caer el sistema se rompió en fases posteriores de transición o reformas

Las federaciones locales de la organización sindical desempeñaron un papel federador clave ya que a diferencia de la cúpula dirigente respaldaron las protestas desde el inicio, aportando sus recursos y experiencias en este ámbito (Beinin y Vairel, 2011). Por ejemplo, en algunas localidades como Kasserine los líderes sindicales locales pusieron autobuses a disposición de los manifestantes para llevarles a Thela, otra localidad cercana y poder apoyar las protestas. La articulación de sus acciones ha sido clave para impulsar el levantamiento popular contra el régimen. La UGTT ha sido esencial para que la revolución alcanzara la dimensión social y geográfica que ha llegado a tener y las huelgas generales convocadas en Qairuán y en Túnez capital tuvieron un impacto decisivo en precipitar la caída del régimen (Lopez García, 2011).

Otros actores de la sociedad civil se movilizaron también: magistrados, organizaciones de derechos humanos y activistas jóvenes junto con colectivos de diplomados desempleados. La movilización de estos diferentes colectivos ha permitido ampliar los “vínculos horizontales” a otros sectores (élite urbana..) que en un principio no se habían movilizado, reforzando el movimiento de protesta y ensanchando su base social.

El hecho de que este tipo de vínculos se estableciera con rapidez se debe a que experiencias de menor alcance geográfico e impacto habían tenido lugar previamente y habían permitido conectar entre sí diversos sectores de la sociedad tunecina. Al principio del año 2008 en la cuenca minera de Gafsa las protestas movilizaron a una gran diversidad de colectivos: madres de familias, adolescentes, diplomados desempleados y militantes sindicales que durante meses desafiaron el régimen (Chouikha y Geisser, 2010: 415-426) .

La unidad de los diferentes sectores de la sociedad civil en torno a la meta común de hacer caer el sistema se rompió en las fases posteriores de transición o reformas, dando paso al retorno a las divisiones y la falta de cohesión social que han dominado las primeras etapas de los procesos de transición en Egipto como en Túnez.

La sociedad civil y el proceso de transición democrática en Túnez

Desde el principio la sociedad civil tunecina ha estado implicada en el proceso de transición política y ha protagonizado el pulso con las fuerzas políticas para que no se desviaran de los objetivos de la revolución. En los primeros meses que siguieron la caída de Ben Ali, el movimiento popular origen de las protestas logró estructurarse con la constitución del Frente del 14 de enero de 2011, formado por

varias agrupaciones de izquierda como la Ligue de la Gauche Travailleuse, el Mouvement des Unionistes Nassériens, Mouvement des Nationalistes Démocrates (Al-Watad) el PCOT (Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie) y el PTPD (Parti du Travail Patriotique et Démocratique), entre otras.

Lograron la destitución del primer gobierno de la transición (Béji Caid Essebsi) y rechazaron el marco constitucional vigente, pronunciándose a favor de la elección de una asamblea constituyente. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos (CNLT ATFD, LTDH entre otras) siguieron luchando para incrementar el nivel de representatividad del Consejo y conseguir que se ampliara de nuevo para convertirse en la Instancia Superior para la Realización de los Objetivos de la Revolución, la Reforma Política y la Transición democrática (ISROR) integrada por 155 miembros⁷. El ISROR se dividió en varias instancias para preparar la primera fase de la transición: ocupando un lugar central en la agenda la preparación de las elecciones de la Asamblea Constituyente que finalmente se celebraron en octubre de 2011.

Tras la celebración de las elecciones el 23 de octubre 2011 y la formación del gobierno de la troika⁸ liderado por el partido islamista Ennahda, vencedor en las elecciones, el papel de la sociedad civil en el proceso de transición entró en una nueva fase marcada por la confrontación y la vigilancia de unas acciones gubernamentales interpretadas como la voluntad de establecer un nuevo poder hegemónico y la imposición de un determinado modelo de sociedad.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han sido particularmente activas para que la nueva Constitución garantice estos derechos. Organizaciones como la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD) o la Asociación de Mujeres Tunecinas para la Investigación y el Desarrollo (AFTURD) entre muchas otras, han participado activamente en la ISROR. Esta última aprobó el artículo 16 del Decreto ley relativo a la elección de la Asamblea Nacional constituyente que prevé que todas las listas deben obligatoriamente ser paritarias y hacer figurar en alternancia candidatos masculinos y femeninos. Los resultados electorales, sin embargo, han mostrado la ingente tarea que queda por delante. Sólo 49 mujeres han sido elegidas (42 del partido de Ennahda) de los 217 miembros⁹. Sus esfuerzos continuos para evitar que sus derechos se vieran amenazados dieron sus frutos. La Constitución adoptada en 2014 reconoce la

⁷ La central sindical UGTT, los partidos de izquierda y el movimiento islamista Nahda, 12 partidos políticos y 18 organizaciones sindicales y asociativas así como otras personalidades y representantes de las regiones, jóvenes y familias de los mártires.

⁸ El Gobierno de Túnez fue formado por una coalición de tres partidos o "troika" después de que el partido islamista Al Nahda ganara las elecciones de octubre del 2011, asociándose con el Congreso Por la República (CPR), del presidente del país, Moncef Marzuki, y con el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades Al Takatol, del presidente de la ANC, Mustafá Ben Yafaar.

⁹ Ver al respecto: *Maghreb Émergent*, 29/10/2011 en <http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebienne/5974-tunisie-49-femmes-a-lassemblee-constituante-42-sont-islamistes.html>

igualdad de género y la obligación del Estado de velar y proteger los derechos y libertades individuales de las mujeres (artículo 20). Reconoce también el principio de discriminación positiva para la participación de las mujeres en el ámbito político (artículo 33).

Una de las cuestiones pendientes para la sociedad civil organizada es hacerse eco de las reivindicaciones de justicia social claramente expresadas en los levantamientos populares en Túnez como en otros países a principios de 2011. La primavera tunecina puso en evidencia el fracaso del supuesto modelo de “ éxito económico “ de Túnez y destapó las profundas desigualdades económicas y sociales, el desempleo y la exclusión, principalmente entre los jóvenes, la fractura regional, la precarización del trabajo, la corrupción y el intervencionismo creciente en la economía de los allegados al poder¹⁰. Es precisamente el punto flaco del proceso de transición en Túnez que puede verse amenazado si no mejoran las condiciones económicas y sociales del país: la cuestión del desempleo; las desigualdades regionales¹¹. Algunas organizaciones como el Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) de la sociedad civil tunecina prestan especial atención a las reivindicaciones económicas y sociales en las regiones¹².

La sociedad civil tunecina está teniendo un papel singular en el proceso de transición, tanto por su labor de vigilancia y denuncia, como de protesta, sensibilización y movilización

El pulso de la sociedad civil con el gobierno entró en una nueva fase después de los asesinatos políticos de dirigentes de partidos de la oposición, Chukri Belaid en febrero de 2013 y Brahimi en julio de 2013. La sociedad civil empezó a movilizarse para frenar, lo que interpretaron como un intento de Ennahda de imponer su modelo de sociedad a toda costa. El contexto regional, con la caída de Morsi en julio de 2013, junto con las grandes movilizaciones de la sociedad civil tunecina llamando a la dimisión del gobierno y la formación de un nuevo ejecutivo de corte tecnócrata han hecho retroceder al partido islamista, que finalmente aceptó la hoja de ruta propuesta por el grupo de negociación formado por cuatro grandes actores de la sociedad civil: UGTT, UTICA, LTDH, y el colectivo de abogados. Ocupando el vacío dejado por unos partidos políticos débiles, la sociedad civil tunecina está teniendo un papel singular en el proceso de transición, tanto por su labor de vigilancia y denuncia, como de protesta, sensibilización y movilización¹³. Desde 2011 surgieron en Túnez muchas iniciativas de la sociedad civil volcadas en el proceso de construcción del nuevo marco institucional como L'Assemblée Constituante Civile (ACC)¹⁴, la plataforma Bawsala y el colectivo-red Dusturna (Thieux, 2013).

¹⁰ Ver al respecto: Béatrice Hibou, Hamza Meddeb et Mohamed Hamdi, *Túnez y su economía política y social tras los acontecimientos del 14 de enero. Los retos de una reconfiguración de la política europea*, Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH), Junio 2011 .

¹¹ Ver al respecto el informe: Tunisie : relever les défis économiques et sociaux, Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord N°124 6 juin 2012, consultado en <http://www.crisisgroup.org/fr/regions/moyen-orient-afrique-du-nord/afrique-du-nord/Tunisia/124-tunisia-confronting-social-and-economic-challenges.aspx>

¹² Para más información ver: <http://www.ftdes.net/sites/default/files/Newsletter%20janvier%202014.pdf>

¹³ Para más información ver la página web del colectivo Doustourna: www.doustourna.org

¹⁴ Para más información ver <http://www.constituantecivile.sitew.com/>

Se crearon canales de diálogo para garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso de redacción de la Constitución que fue finalmente adoptada en enero de 2014. Se establecieron los primeros contactos entre los representantes de la sociedad civil y los miembros de la ANC, para crear los propios mecanismos de participación en los cuales participaron 300 representantes de la sociedad civil: se organizaron talleres con los seis comités de redacción y se celebró un proceso de consulta nacional que tuvo lugar entre los meses de diciembre de 2012 y febrero de 2013 en el que participaron cerca de 6.000 ciudadanos y 300 OSC¹⁵.

La participación de la sociedad civil en los espacios políticos abiertos a raíz de los procesos de apertura y cambio democrático es clave para afianzar una nueva cultura política basada en la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo en contextos donde el proceso de reforma flaquea existe el riesgo de que se conviertan en espacios de cooptación y legitimación de los gobiernos.

La sociedad civil en Marruecos: reconocimiento constitucional y espacios de participación

Desde el inicio del proceso de reforma, anunciado por el discurso del 9 de marzo de 2011 por Mohamed VI, la sociedad civil se ha dividido ante la oportunidad de participar a dicho proceso. Para la reforma constitucional se creó una Comisión, que realizó consultas a numerosos actores políticos y sociales. Si bien una parte de la sociedad civil se implicó en el proceso, otra lo rechazó por considerar que estaba bajo la tutela del *majzén*. Tanto el M20F, como asociaciones como la AMDH, partidos de extrema izquierda y el movimiento Justicia y Espiritualidad – consideran que la reforma constitucional, pese a aportar cambios más o menos significativos, no permite realizar progresos sustanciales teniendo en cuenta que los pilares del sistema siguen intactos y las reformas introducidas no permiten atisbar cambios sustanciales en el reparto de poderes. Las divisiones de la sociedad civil se acentuaron en la fase posterior de desarrollo de las disposiciones constitucionales, que reconocen un rol político a la sociedad civil (artículos 12 a 15 de la Constitución¹⁶). El Ministerio encargado de las relaciones con el Parlamento y la sociedad civil creó una Comisión Nacional de Diálogo sobre la Sociedad Civil (denominada *Comisión Choubani*, por el nombre del ministro responsable, del PJD).

¹⁵ Ver al respecto la entrevista a Badreddine Abdelkefi, miembro de la ANC y encargado de las relaciones con la sociedad civil en Jasmine Foundation, consultado en <http://www.jasmine-foundation.org/en/?tag=badreddine-abdelkafi>, 10/10/2014.

¹⁶ El artículo 12 estipula que: "las asociaciones contribuyen, en el marco de la democracia participativa a la elaboración, aplicación y evaluación de las decisiones y de los proyectos de las instituciones elegidas y los poderes públicos". En el artículo 13 se estipula que los poderes públicos propiciarán la creación de instancias de concertación con el fin de asociar los diferentes actores sociales en la elaboración y aplicación de las políticas públicas. El artículo 14 reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar propuestas en materia legislativa y el artículo 14 a elevar peticiones a los poderes públicos.

La metodología seguida para la creación de espacios de participación ha sido escasamente participativa y ha creado un clima de desconfianza poco propicio al diálogo

Desde el inicio el proceso, se han producido varios enfrentamientos entre parte de las organizaciones de la sociedad civil y este Ministerio, que criticó nada más iniciarse el proceso a un conjunto de asociaciones que reciben financiación internacional, acusándolas de falta de transparencia. En su respuesta a dichas críticas, diversas OSC instaron al gobierno para que la transparencia se ampliase a la totalidad de las asociaciones (incluidas las del PJD) y a las cuentas del Estado, reseñando los circuitos opacos de financiación de algunas entidades, y criticando las prácticas clientelistas a la hora de acceder a los recursos estatales (financieros, logísticos y humanos) (García Luengos y Thieux, 2014).

En respuesta a la manifiesta hostilidad del gobierno y para encarar los retos planteados por el nuevo rol que la Constitución otorga a la sociedad civil, esta último inició un proceso de reflexión colectiva entorno a la dinámica llamada “*Appel de Rabat*” (conformado inicialmente por unas 400 asociaciones) al margen del proceso de diálogo nacional impulsado por la Comisión Choubani.

Los primeros pasos de la Comisión¹⁷ vinieron a confirmar los recelos de la sociedad civil: la falta de representación y cualificación profesional de algunas de las personas invitadas a formar parte de dicha Comisión o la exclusión de otras organizaciones, que son una referencia en el movimiento de los derechos humanos y de la defensa de los derechos de las mujeres. Una primicia a nivel de representación en instituciones públicas es la participación en esta Comisión de los salafistas, a través de la figura de Hamad Kebbaj, portavoz de las escuelas coránicas de Marrakech, afiliadas a la Asociación por el Corán y la Sunna y clausuradas en 2013 por decisión de la delegación local del Ministerio de Asuntos Religiosos.

La metodología seguida para la creación de espacios de participación ha sido escasamente participativa y ha creado un clima de desconfianza poco propicio al diálogo. Como consecuencia se han acentuado las divisiones y la sociedad civil se ha fragmentado en tres grupos: un primer grupo que considera que el proceso de reforma es satisfactorio y responde a sus expectativas: en general se trata de actores próximos al poder; un segundo grupo que adopta una posición pragmática y dispuesto a luchar por los elementos positivos del proceso (Espace Associatif); un tercer grupo (AMDH) que considera que el proceso es ilegítimo desde el principio ya que no es el fruto de un proceso constituyente y se trata más bien de un simulacro destinado a mantener las cosas tal como están.

¹⁷ Ver la página oficial de la Comisión: www.hiwarmadani2013.ma

Aunque denostado por gran parte de la sociedad civil marroquí, el proceso de diálogo ha impulsado una nueva dinámica de reflexión colectiva sobre el papel que las organizaciones de la sociedad civil tienen que desempeñar en los nuevos espacios de participación creados por las Instituciones y una toma de conciencia sobre la necesidad de reforzar su papel en ámbitos clave como la incidencia política. La dinámica del *Appel de Rabat* está impulsando un debate muy importante en el seno de la sociedad civil y ha servido para reforzar la toma de conciencia de las asociaciones sobre la necesidad de reforzar su capacidad de incidencia política para poder influir en el proceso en curso. En el marco del *Appel de Rabat* se han celebrado 21 encuentros regionales con la participación de 1.300 asociaciones de diversas regiones de Marruecos abriendo espacios de reflexión sobre la posición de las OSC respecto a las reformas democráticas emprendidas por el régimen; la reforma de la ley sobre las asociaciones; las aportaciones para el desarrollo legislativo de los artículos 12 al 15 de la Constitución; la financiación de las asociaciones; la gestión del voluntariado; el refuerzo de las capacidades de las OSC; el derecho de acceso a infraestructuras de base.

Otras organizaciones de la sociedad civil se han volcado también al margen del proceso oficial, en la elaboración de memorandos para dar forma a las nuevas disposiciones constitucionales como las organizaciones de mujeres que han trabajado sobre el artículo 19 y la puesta en marcha de la Alta Autoridad para la paridad y la lucha contra todas las formas de discriminación (APALD) o Transparency Maroc sobre el desarrollo legislativo de la disposición constitucional relativa al derecho al acceso a la información (artículo 27).

Paralelamente a este proceso de diálogo, el régimen sigue recurriendo a métodos represivos para acallar las voces discordante. El deterioro de la situación de la libertad de información en Marruecos ha sido denunciado por numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos¹⁸. Varios informes y testimonios han puesto en evidencia que desde 2012, coincidiendo también con un debilitamiento del M20F, el régimen está imponiendo aún más restricciones a las libertades de asociación, expresión y reunión a los actores que cuestionan su legitimidad (militantes del 20 de febrero, miembros del movimiento justicia y espiritualidad, defensores de los derechos humanos). En el índice de libertad de prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) Marruecos ha descendido del puesto 97 en 2006 a 138 en el 2012 y 136 en 2014 de los 180 países clasificados respecto a la libertad de prensa.

¹⁸ Ver al respecto el informe mundial 2014 de Human Rights Watch, recuperado de <http://www.hrw.org/fr/world-report/2014/country-chapters/122032> o el comunicado de Amnistía Internacional: <http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/marruecos-usa-terrorismo-encarcelar-periodistas-2014-05-20>

Las posibilidades de recurrir a la justicia en caso de violencias contra los manifestantes son muy limitadas en Marruecos

Se han producido también un endurecimiento de la represión contra las manifestaciones y algunas reunión en los espacios públicos. En algunos casos como el Sahara Occidental o la región del Rif las protestas y manifestaciones han sido sistemáticamente reprimidas, y en muchos casos, impedidas antes de que se pudieran llevar a cabo. Ha sido el caso, por ejemplo, de la manifestación prevista en Tánger con motivo de la celebración del tercer aniversario del M20F, que no pudo celebrarse en el lugar donde había sido convocada por el despliegue policial que impidió el acceso al lugar de los manifestantes. Otras manifestaciones han dado lugar a una fuerte represión por parte de las autoridades, como el Sit-in, organizado en Rabat en agosto de 2013 contra el indulto de Manuel Galván (detenido por violaciones de niños en Kenitra), o la manifestación del 6 de abril de 2014 de la coalición sindical donde fueron arrestados 9 militantes del movimiento M20F. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha denunciado que desde julio de 2014, al menos unos 12 eventos que organizó han sido prohibidos, como la jornada sobre medios de comunicación y democracia que iba a celebrarse en la Biblioteca Nacional de Rabat en septiembre de 2014¹⁹. Hay numerosos militantes, UNEM, M20F, diplomados desempleados, militantes saharauis detenidos (317 según el último informe de la AMDH)²⁰ y otros muchos pendientes de juicio. Se siguen denunciando también casos de tortura o malos tratos durante las detenciones. Los casos de violencia, malos tratos o incluso torturas cometidos por las fuerzas de seguridad raramente son investigados y llevados antes los tribunales. Las posibilidades de recurrir a la justicia en caso de violencias contra los manifestantes son muy limitadas en la medida en que siguen siendo válidas como pruebas las actas policiales y no se contestan delante de los tribunales.

Todas estas violaciones están en contradicción con la imagen reformista que el régimen marroquí pretende transmitir en el exterior. A pesar de comprometerse a través la firma de una serie de tratados y convenios internacionales a respetar los derechos humanos en la práctica siguen siendo numerosos y preocupantes las violaciones cometidas²¹.

Una participación real y efectiva de la sociedad civil en la elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas públicas requiere unas condiciones básicas que no reúnen los espacios establecidos en Marruecos y lo primero sería la existencia de un entorno legal favorable a las OSC, lo que está lejos de ser el caso en Marruecos donde todavía se pueden constatar muchos atropellos a las libertades de asociación, reunión, prensa y expresión

¹⁹ Ver el comunicado de prensa de la FIDH y OMT: "Maroc recrudescence des entraves aux ONG", del 7/10/2014: <http://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/maroc-association-marocaine-des-droits-humains-amdh/16184-maroc-recrudescence-des-entraves-a-l-action-des-ong>

²⁰ http://telquel.ma/2014/06/18/rapport-lamdh-317-prisonniers-politiques-au-maroc_139493

²¹ Ver entrevista con Kamel Lahbib

Variables y factores que limitan el impacto de la sociedad civil sobre los procesos de cambio político

Para valorar el rol que desempeña la sociedad civil en los procesos de cambio político, es necesario considerar una serie de variables relacionadas con factores exógenos y endógenos. La existencia o no de un entorno favorecedor para el trabajo de la sociedad civil, condiciona mucho la naturaleza y alcance de las acciones de las organizaciones y su capacidad de influencia, sobre el mismo marco político legal que les constriñe o coacciona. La evolución de las condiciones legales de la mayoría de los países del Norte de África después de 2011 presenta más motivos de preocupación que de optimismo. Los marcos legales vigentes y su aplicación en la mayoría de los países de la región limitan y reprimen los derechos y libertades fundamentales para el ciudadano y la vida asociativa: derechos de asociación, reunión y manifestación, libertad de expresión y prensa. En segundo lugar y estrechamente vinculado a las variables externas, es la capacidad de las OSC de articular sus acciones; construir coaliciones duraderas y así fortalecer su impacto y capacidad de incidencia sobre las agendas políticas. El análisis de las dinámicas de la sociedad civil en los países del Norte de África pone de manifiesto las fracturas que dividen a la sociedad civil y merman su capacidad de incidir en los procesos políticos.

La brecha generacional

Los jóvenes fueron los protagonistas de las protestas sociales que marcaron el final de 2010 y principios de 2011, sin embargo su implicación en la fase posterior ha sido mucho más residual y en general su presencia en las OSC es aún escasa y minoritaria.

Los movimientos de jóvenes que han liderado las protestas a partir de 2011, han adoptado formas y estrategias de movilización, en ruptura con el tipo de organizaciones conocidas: estructuras horizontales y sin liderazgo. Estos mismos movimientos, que han mostrado una gran capacidad de movilización y reivindicación en el momento de las revueltas, se encuentran durante las fases de transición frente a la encrucijada de buscar la vía que les permita tener cierta continuidad y están divididos respecto a los pasos a seguir en la próxima etapa: crear organizaciones, asociaciones o partidos políticos o seguir siendo movimientos informales sin estructuras.

Al mismo tiempo las estructuras tradicionales partidistas o asociativas tienen muchas dificultades en implicar y movilizar a la juventud. En Argelia, a modo de ejemplo y de acuerdo con un estudio realizado por el Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) tan solo el 4,7% de

los jóvenes que participaron en la encuesta se habían adherido a un proyecto asociativo (Cerroloza, 2013).

Muchas de las organizaciones más veteranas no han conseguido superar la brecha generacional y tienen un problema de incorporación de los jóvenes. En Túnez, por ejemplo, todavía permanecen viejos reflejos de desconfianza heredadas de los años de dictadura entre las OSC que obstaculizan el proceso de renovación de su personal y de los puestos de responsabilidad. Este fenómeno tiene un impacto negativo en la medida en que las organizaciones están perdiendo un potencial importante que les permitiría rejuvenecer sus organizaciones, vincular su experiencia asociativa con nuevas modalidades de acción colectiva.

Por otro lado, las organizaciones o partidos formados por jóvenes necesitan experiencia. Las nuevas formaciones políticas constituidas por jóvenes en Egipto tienen poco peso y necesitaría ir de la mano de otras estructuras para afianzar su trabajo y reforzar sus capacidades.

Algunas organizaciones, sin embargo, conscientes de estos retos han remodelado sus modos de gestión interna con el fin de mejorar la transparencia y la democracia interna así como el rejuvenecimiento de sus miembros. Es el caso, por ejemplo de la AMDH que ha lanzado un programa destinado a formar nuevos líderes asociativos: el programa *Jouvance* (rejuvenecimiento) para permitir que la nueva generación esté formada y preparada para asumir cargos de responsabilidad en el seno de la organización.

El rejuvenecimiento de los miembros de las asociaciones es un reto compartido por muchas organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de mujeres se enfrentan al mismo problema y reto de integrar jóvenes en sus estructuras internas. En el seno de la Federación de la Liga Democrática de los Derechos de las Mujeres (LDDF) este proceso ha empezado en 2009, con la celebración de su congreso y la creación de un espacio específico destinado a los jóvenes "Espace avenir".

La brecha geográfica

La capacidad de articulación de la sociedad civil se ha visto también debilitada por la brecha entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito urbano y las que están activas en el ámbito rural y periurbano. Hay un desequilibrio pronunciado entre las organizaciones, que situadas en los grandes centros urbanos, han tenido más acceso a los recursos (nacionales como internacionales)

Las organizaciones o partidos formados por jóvenes necesitan experiencia

y las organizaciones que trabajan en el ámbito rural o en las regiones con más dificultades para encontrar recursos y con acceso limitado a la información sobre las posibilidades de financiación²². En las regiones más marginadas, como es por ejemplo el caso de la región de Kasserine en Túnez, el tejido asociativo es débil y poco estructurado. Estas regiones a pesar de estos notables déficits han estado precisamente en el origen de los procesos de movilización y gestación de las protestas sociales. En efecto, es en las regiones periféricas y marginadas, que han padecido con más intensidad las injusticias económicas y sociales, donde las protestas han estallado primero. Sin embargo, desde entonces, no se han producido cambios que permitan atisbar una nueva dinámica respecto a las regiones, tanto por parte de los gobiernos de la transición como por parte de las estrategias de los actores de la sociedad civil. En estas regiones se sigue acusando un desfase entre las preocupaciones, reivindicaciones y demandas de la población y del tejido de la sociedad civil local que trata de canalizarlas y las dinámicas de la sociedad civil en las grandes ciudades y las zonas costeras del país. La brecha del discurso entre las organizaciones en el ámbito rural y las que operan en el ámbito urbano es aún más pronunciada en el caso de las organizaciones de mujeres.

En el caso de Túnez, algunas organizaciones están desarrollando iniciativas para responder a este desafío: organizaciones como la REMDH, LTDH, ATFD, AFTURD han creado antenas regionales con el objetivo de fortalecer las asociaciones a nivel local: a través de la transmisión de experiencias en materia de incidencia política y otros aspectos clave para fortalecer las organizaciones.

Colmar la brecha entre las organizaciones que enfocan su trabajo en la incidencia política, pero que tienen escaso anclaje social, y las organizaciones locales que realizan un trabajo de proximidad importante, es clave para reforzar el impacto de la sociedad civil sobre los procesos de cambios políticos.

La brecha ideológica

En las sociedades del Norte de África existe también una brecha ideológica entre dos proyectos de sociedad radicalmente opuestos (el religioso y el secular) que divide también a las organizaciones de la sociedad civil y merma su capacidad de contribuir en favorecer una mayor cohesión social sobre el cual asentar el proceso democrático. Tanto en Túnez como en Egipto la polarización entre el frente

²² Conclusiones principales del Taller realizado con las OSC en Kasserine en abril de 2013 en el marco de la realización del diagnóstico de sociedad civil en Túnez realizado por Awatef Ketiti para el Encuentro Civil Euromed y coordinado por Laurence Thieux.

Para participar plenamente en la construcción de sociedades más democráticas, plurales, justas y igualitarias, las organizaciones de la sociedad civil tienen que poder desarrollar libremente sus actividades

islamista y la oposición secular ha marcado los primeros años de la transición. El diálogo entre estas dos tendencias ha sido residual tanto entre partidos políticos como entre las asociaciones. Las dificultades de diálogo y entendimiento han sido particularmente manifiestas entre las OSC de defensa de los derechos de las mujeres, que han visto con mucha preocupación la llegada al poder de las fuerzas islamistas, con una agenda política claramente conservadora respecto a los derechos de las mujeres. En el caso de Marruecos este enfrentamiento ha llevado a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres a demarcarse del movimiento como el M20F donde la corriente islamista del movimiento Justicia y Espiritualidad estaba representada.

Estas divisiones que debilitan la capacidad de articulación de la sociedad civil han sido también alimentadas como lo hemos visto antes, por las propias estrategias del poder destinadas a neutralizar la sociedad civil. El enfrentamiento entre fuerzas seculares y religiosas ha distorsionado la posición de la sociedad civil respecto al juego democrático. Como sucedió en Argelia, con el apoyo que la sociedad civil progresista al golpe militar de los generales de 1992, abortando el proceso electoral que hubiera dado la victoria a los islamistas del Frente Islámico de Salvación (FIS), el movimiento Tamarod²³ en Egipto contribuyó a legitimar el retorno de los militares a la cabeza del Estado y la evicción del Presidente Morsi en julio de 2013.

Conclusiones

Tras la caída de algunas de las dictaduras más aferradas al poder y el inicio de complejos e inciertos procesos de transición, los escenarios políticos del Norte de África presentan tantos desafíos como oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil. Para participar plenamente en la construcción de sociedades más democráticas, plurales, justas y igualitarias, las organizaciones de la sociedad civil tienen que poder desarrollar libremente sus actividades, actuar de forma autónoma y tener la capacidad de construir amplias coaliciones.

Las organizaciones de la sociedad civil, como lo hemos visto a través de los diferentes casos de estudio analizados, realizan una labor fundamental en diferentes ámbitos y contribuyen a transformar los parámetros que caracterizan las relaciones entre el ciudadano y las instituciones y gobiernos. Realizan una labor imprescindible de denun-

²³ La campaña Tamarod , en árabe 'desobediencia' o 'rebelión', pretendía reunir 15 millones de firmas para pedir la destitución de Mohamed Mursi y convocar unas nuevas elecciones presidenciales. El punto culminante de la iniciativa fue la amplia manifestación ante el palacio presidencial de Ittihadiya el 30 de junio de 2013.

cia de las prácticas autoritarias y de defensa de las libertades públicas. Desde el inicio de la llamada “primavera árabe”, las dinámicas de movilización ciudadana se han transformado y la idea de participación ha calado hondo entre amplios sectores de estas sociedades y principalmente entre los jóvenes. En el caso de Túnez, la sociedad civil está desempeñando un papel central en la construcción del nuevo marco institucional: de vigilancia, de mediación y también de propuesta. Las organizaciones de la sociedad civil son también actores clave en los procesos de mediación con la ciudadanía.

A pesar de las sofisticadas estrategias empleadas por los regímenes para neutralizar la función de contrapoder de la sociedad civil, nuevas formas de contestación y acción colectiva han aparecido en las sociedades del Norte de África. Aunque la sociedad civil organizada no ha sido el motor de las protestas, los casos analizados en el presente artículo ponen en evidencia, las relaciones y vínculos entre estas nuevas formas y estrategias de movilización y las organizaciones con una trayectoria de trabajo y experiencia más larga en el ámbito de la lucha por los derechos humanos y el Estado de derecho. De ahí, la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil consigan mantener a través de redes y plataformas este nivel de articulación para tener más peso y lograr mayor espacio de participación en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

El rol que las OSC desempeñen en los procesos de democratización está, sin embargo, muy condicionado por el régimen y las estrategias utilizadas por el poder intentando controlar sus actividades. Para ejercer plenamente una función democratizadora, las organizaciones de la sociedad civil tienen que poder desarrollar sus actividades en entornos favorables, y no es el caso de la mayoría de los países de la región donde prevalecen “entornos hostiles”.

Para que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sindicales sigan siendo un motor de cambio, es imprescindible levantar los obstáculos que coartan y restringen las actividades de las organizaciones. La adopción de marcos legales que favorezcan el desarrollo y las actividades de una sociedad civil rica, diversa e influyente es prioritaria y debería constituir una cuestión clave en el diálogo institucional político de los gobiernos e instituciones europeas con los países del sur y este del Mediterráneo. La promoción de relaciones constructivas entre la sociedad civil y los nuevos gobiernos que están protagonizando los procesos de transición o de reforma requiere mínimos para restablecer la confianza. Si estos mínimos no se cumplen es muy difícil plantear siquiera la creación de espacios de diálogo.



Referencias bibliográficas

- Aenius Bosserup, Rasmus, Martínez, Luis y Holm, Ulla (2014), "Algeria after the revolts regime endurance in a time of contention and regional *insecurity*" *DIIS Report 15*.
- Thieux, Laurence (2013) (coord.), Sociedad civil y transiciones en el Norte de África, Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos, Barcelona: Icaria editorial.
- Barreñada Isaías: "Las revoluciones árabes, la cuestión de la justicia social y el papel de los sindicatos", *Anuario 2011*, Fundación Primero de mayo, Madrid, pp.261-277.
- Beinin, Joel (2009), "A workers'social movement Egypt 2004-2009,pp.181-217)
- Beinin, Joel y Vairel, Frédéric (2011), "Afterward:popular uprisings in Tunisia and Egypt en Joel Beinin y Frédéric Vairel (eds), *Social movements, mobilizations and contestation in the Middle East and North Africa*. Stanford: University Press.
- Ben Néfissa, Sarah (2011), "Révolution et société civile en gestation", en *Humanitaire*, nº29, 2011 consultado en <http://humanitaire.revues.org>
- Carrollaza, Érika (2013), *Diagnóstico de sociedad civil en Argelia*, Informe realizado para el Encuentro Civil Euromed (ECEM).
- Chouikha, Larbi y Geisser, Vincent (2010), " Retour sur la révolte du bassin minier. Les cinq leçons politiques d'un conflit social inédit" en *L'Année du Maghreb*. Disponible en: <http://anneemaghreb.revues.org/923> ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.92
- Foundation For The Future (2013), "Étude sur les organisations de la société civile en Tunisie". Foundation For The Future.
- García Luengos, Jesús y Thieux, Laurence (2014), Gobernanza democrática y reformas en Marruecos después de la primavera árabe. Del discurso a la práctica. Madrid: Fundación CIDEAL, ReSeT.
- Hawthorne, Amy (2004), "Is civil society the answer" en *Carnegie Papers*, 2004, consultado el 2 de octubre 2013 en : <http://carnegieendowment.org/files/CarnegiePaper44.pdf>
- Ketiti, Awatef (2013) *Diagnóstico de la sociedad civil en Túnez*, Informe realizado para El Encuentro Civil Euromed (ECEM).
- International Crisis Group (2011), " Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (IV): La voie tunisienne", *Middle East/North Africa Report N°106*, 28 de abril. Disponible en <http://www.crisisgroup.org/fr/regions/moyen-orient-afrique-du-nord/afrique-du-nord/Tunisia/106-popular-protests-in-north-africa-and-the-middle-east-i-v-tunisias-way.aspx>
- Leca, Jean (1993),"La démocratisation dans le monde árabe: incertitude, vulnérabilité et légitimité", en Salame, Ghassan (Dir), *Démocraties sans démocrates*. Paris: Fayard.
- Liverani, Andrea (2008), *Civil society in Algeria, the political functions of associational life*. Londres: Routledge.
- López García, Bernabé (2011), "La centralidad de la Central (la UGT en la revolución tunecina)" en *Crisis en el mundo árabe* nº 26, 12 de abril . Consultado en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CON TEXT=/elcano/elcano_es/especiales/crisismundoarabe/respuestacrisis/notasocma/observatorio_bernabe_ugt_revuelta_tunecina
- Oberschall, A. (1973), *Social Conflict and social movements*, Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Pratt, Nicola (2007), *Democracy and authoritarianism in the arab world*, Londres: Boulder.

Thieux, Laurence (2009), "Le secteur associatif en Algérie: la difficile émergence d'un espace de contestation politique " en *l'Année du Maghreb*. Paris: CNRS, éditions.

Tozy, Mohamed (1999), *Monarchie et Islam Politique au Maroc*, Presse de Sciences Po.

Yom L. Sean (2005), "Civil society and democratization in the arab world", *Middle East Review of International Affairs*, Vol 9, n°4.

Werenfels, I. (2014), "The risks of playing for time in Algeria", *SWP Comments*, mayo.

